

CAPÍTULO CUARTO

BOLIVIA: DE LOS AÑOS REVOLUCIONARIOS A LA INSTAURACIÓN DEMOCRÁTICA

BOLIVIA: DE LOS AÑOS REVOLUCIONARIOS A LA INSTAURACIÓN DEMOCRÁTICA

Por JOSÉ LUIS RUBIO CORDÓN

La palabra del boliviano es suave y persuasiva. Se articula con un acento convincente. pero la palabra de Bolivia no suele ser escuchada, está rodeada de silencios.

Aislada en su geografía, sus alturas, sus llanuras, sus selvas, ¿quién escucha su voz y su queja? Todas las disputas entre países de su América del Sur se fueron solventando. La suya no. La herida de su arrebatada salida al mar sigue viva, con dolor. Pero no es escuchada.

¿Dónde está Bolivia?, como preguntó en el XIX la reina de Inglaterra. Sólo la tierra en donde encontró la muerte el "Che" Guevara, que se escuchaba hace treinta años. Nada más.

Y todo lo que el pueblo de Bolivia hizo en sus jornadas de lucha que siguieron a 1952 ¿no se recuerda? Ni siquiera se grabó en la memoria histórica de todos los inquietos "revolucionarios" del mundo..

En política hay cosas que se pagaron muy caras en los medios intelectuales dominantes, sobre todo no proclamarse "marxista-leninista". Y la revolución boliviana no lo hizo, porque no quiso ser una revolución "ortodoxa", a gusto del tribunal internacional que juzga los movimientos populares, sino solamente un cambio profundo y hecho con urgencia en las condiciones sociales de su pueblo.

LOS GRANDES PROBLEMAS DE BOLIVIA

Bolivia, en el centro de la América del sur, cuenta actualmente con una extensión de 1.098.000 km² (más de dos Españas). A esta superficie han quedado reducidos, por diversas conquistas de sus vecinos, los 2.300.000 km² con que contaba al producirse su surgimiento como nación independiente en 1825.

La población boliviana era en 1952 de un total de 3.500.000 de habitantes, siendo actualmente de 8.000.000. En números redondos, la distribución racial de esta población es de: 70% de indígenas —quechuas y aimaras en su mayoría—, 20% de mestizos y 10% de blancos.

La situación boliviana era tradicionalmente conocida como la del “mendigo sobre un montón de oro”. Unas riquezas potenciales extraordinarias contrastaban con unas condiciones reales de vida de la mayor parte de la población enteramente miserables, debido a una pésima organización económica.

Resumiendo en un apretado esquema los grandes males de Bolivia al tiempo que se va a producir la revolución de 1952, se pueden señalar los siguientes:

- 1.º *Enclaustramiento*: La pérdida de la salida al mar a manos de Chile, tras la Guerra del Pacífico de 1879, es la gran herida de Bolivia. Una herida que no se cerrará nunca más que con una recuperación de esa salida al Pacífico, verdadero ideal que une a la totalidad de los bolivianos por encima de cualquier diferencia política.
- 2.º *Falta de unidad física nacional*: La parte poblada del Altiplano —al oeste— se encontraba totalmente incomunicada con la parte muy poco poblada del Oriente. Una gran riqueza agraria, ganadera y forestal posible no era aprovechada por el país. No había carretera que uniera ese Oriente —especialmente el de Santa Cruz de la Sierra, que, a pesar de su nombre extremeño, es completamente llana— con La Paz. (Siempre se refiere que las traviesas del ferrocarril hacia el Pacífico se importaron de Canadá, pues no era posible traerlas del Chaco).
- 3.º *Estructura agraria feudal*: El grado de concentración de la propiedad de la tierra —en las zonas agrarias tradicionales— era extremadamente elevado: según el censo de 1950 las explotaciones de más de 1.000 hectáreas significaban el 6,35 del total, pero representaban el 91,93 del total de la superficie. Las comunidades indí-

genas persistentes con la independencia habían sido destruidas casi en su totalidad a mediados del siglo pasado —especialmente por Melgarejo— y sus integrantes pasaron a ser verdaderos siervos —o casi semiesclavos— de los grandes hacendados. Se mantenían instituciones de sumisión como la de los “pongos”, para prestar servicios personales de todo tipo, gratuitamente, al señor. Condiciones de alimentación absolutamente insuficientes, de habitabilidad casi animal, de educación nula, hacían que la mayoría de la población campesina, indígena, por supuesto, no participara en absoluto en la vida política y económica del país. (La norma electoral no permitía votar más que a los que sabían leer y escribir, reduciéndose el censo electoral, por ello, a 150.000 personas).

- 4.º *Dependencia económica del estaño, en manos extranjeras*: Con una agricultura muy atrasada y una industria casi inexistente, la economía del país estaba enteramente ligada a la extracción y exportación del mineral de estaño. El 90% del total de las exportaciones procedían de este capítulo, lo que significaba la total dependencia de la economía boliviana del mismo. Sobre este hecho se añadía el de que la mayor parte de la riqueza estañífera estaba en manos de tres grandes consorcios internacionales (el grupo Patiño, con el 43%, el grupo Hochschild, con el 22% y el grupo Aramayo con el 7%). El 28% restante se repartía entre 25 pequeñas compañías y unos 2.500 mineros individuales. Las condiciones del trabajo en las minas —salario, alimentación, vivienda, etc.— venían a representar la vigésima parte del nivel de sus paralelas entre los mineros norteamericanos. El nivel alimenticio se situaba en las 1.100 calorías por habitante y día. Y la vida media del minero era de 33 años. La represión extremadamente violenta de cualquier movimiento de protesta, era una constante en las minas. Por otra parte, el cogollo social que representaban los grandes mineros, sus funcionarios locales, los latifundistas y los grandes comerciantes —la llamada “Rosca”—, dominaba plenamente al Estado boliviano. Los consorcios mineros, por ejemplo, pagaban a la Hacienda los impuestos que querían pagar, lógicamente muy bajos o incluso nulos en algunos años. Como se decía, los “barones del estaño” reinaban en Bolivia.

LA GUERRA DEL CHACO Y EL DESPERTAR NACIONALISTA

Entre 1932 y 1935 un sangriento conflicto bélico enfrentó a Bolivia con su vecino Paraguay en la llamada Guerra del Chaco. A diferencia de otras

vecindades iberoamericanas teñidas de enemistades tradicionales, no existía entre Bolivia y Paraguay —ni existe hoy— resentimiento o rivalidad. La guerra estalló —según criterio general— por el mantenimiento de intereses externos a ambos países: la extensión de las concesiones petrolíferas en el Chaco a dos grandes compañías internacionales: la Standard Oil por Bolivia y la Royal Dusch Schell por Paraguay.

Para Bolivia la Guerra del Chaco significó la pérdida de 50.000 vidas y de 250.000 km² de su territorio. Tal descalabro, sin embargo, significó el surgimiento de una conciencia nacional boliviana. La unidad de las armas significó una unificación de conciencias. Y significó, también, una reflexión sobre la enfermedad del país, reflexión que sacudió tanto a los militares jóvenes como a los universitarios, tanto a obreros, como a mineros y campesinos. Un nacionalismo agudamente crítico se puso en marcha.

La primera manifestación de este nacionalismo la inició un movimiento de militares jóvenes que instaló en el poder al coronel David Toro (17-mayo-1936). Su resolución más destacada fue la anulación de las concesiones a la Standard Oil.

Inmediatamente después le sigue (13-julio-1937) el coronel German Busch. Busch convoca una Asamblea Constituyente que formula la Constitución de 1938 y le elige como Presidente constitucional. Continuando el nacionalismo económico Busch llegó a algo intolerable para los “barones del estaño: el 7 de junio de 1939 dicta un decreto disponiendo el control por el gobierno de las divisas que proporcionaba la exportación del mineral (el Estado percibía las divisas, daba hasta el 50% a los productores, y les permitía el envío al exterior del 5%). Ante una manifestación en la Plaza Murillo, de La Paz, Busch declara: *“Yo no he llegado a la presidencia para servir a los capitalistas. Ellos deben servir al país, y si no lo hacen por su voluntad, lo harán a la fuerza”*.

No hay fuerzas políticas nacionalistas organizadas aún. Busch está solo, disuelve el Congreso y camina hacia la dictadura. Y pronto, la mañana del 23 de agosto de 1939, aparece “suicidado”.

Concluye, con él, este primer intento de política nacionalista, y se reinstala abiertamente el poder de la “Rosca”.

LA VUELTA DEL NACIONALISMO: VILLARROEL Y MNR

El nacionalismo precisaba crear su propio aparato político para oponerse al dominio del aparato político de los intereses tradicionales (el

PURS, especialmente). Intelectuales, universitarios, escritores, abogados laboristas, líderes mineros, etc. —Victor Paz Estenssoro, Hernan Siles Zuazo, Augusto Céspedes, Carlos Montenegro, etc.— crean en 1942 un Movimiento Nacionalista Revolucionario, cuyo objetivo declarado es “la liberación económica y la soberanía de Bolivia”, contra “la falsa democracia entreguista” y contra “el pseudosocialismo instrumento de una nueva explotación”. Pronto el MNR establecerá como sus grandes metas la reforma agraria y la nacionalización minera.

En el seno del Ejército se había creado una organización llamada RADEPA (Razón de Patria) con objetivos también nacionalistas. Y fruto de sus trabajos es el golpe militar nacionalista que encabeza el mayor Gualberto Villarroel el 20 de diciembre de 1943, derribando al Presidente Enrique Peñaranda, general de la vieja escuela. El golpe cuenta con la colaboración civil del MNR, algunos de cuyos componentes entrarán en el nuevo gobierno.

La política nacionalista de Villarroel se enmarca en los típicos movimientos “populistas” de la época: desplazan de las posiciones en el Estado a la oligarquía pero sin destruirla, y, por otra parte, despiertan el movimiento popular de masas. Villarroel establece el control de las divisas que producen las minas, reinsistiendo en el intento de Busch pero sin llegar a la nacionalización. Declara abolido el “pongueaje” y el “mitanaje”. Realiza una política favorable a los trabajadores en materia de salarios y de despidos. Inicia la toma de conciencia del campesino, del indígena. Alienta la sindicación, especialmente minera. Anuncia la reforma agraria, aunque no podrá ponerla en marcha. E inicia la carretera al Oriente, a Santa Cruz.

Políticamente se convoca una nueva Constituyente, en julio de 1945. La nueva Constitución en marcha elige a Villarroel como Presidente.

Pero una política de este tipo, que lesionaba a los intereses norteamericanos e ingleses en Bolivia, y que se desarrollaba cuando el entendimiento soviético-norteamericano impedía calificarla de “comunista”, tenía forzosamente que ser calificada de “fascista”. Villarroel sufrió, por ello, el ataque de la oligarquía local y del comunismo local en actuación conjunta.

El resultado del clima surgido al finalizar la II Guerra Mundial, con las enormes presiones que sobre el régimen nacionalista de Bolivia se ejercen, es un golpe rápido en La Paz, protagonizado por comunistas del PIR y miembros de la “Rosca” que, el 21 de julio de 1946 detiene, mata, tira

por un balcón de palacio y cuelga de una farola a Villarroel y algunos de sus compañeros. (Arze, líder de los comunistas, había pedido a Estados Unidos la intervención militar en Bolivia).

REINSTALACIÓN DE LA “ROSCA”

Se reinstala el gobierno tradicional. Tras una etapa breve de Junta Provisional, las elecciones dan el triunfo, en enero de 1947, al candidato de la “Rosca” Enrique Hertzog (del PURS), quien integra el nuevo gobierno con dos ministros comunistas.

La labor de esta etapa consiste en la destrucción de lo realizado por el villarroelismo: en materia de control económico de las minas, y en materia de legislación laboral y campesina. Se suceden los aplastamientos en baños de sangre de las protestas mineras (masacres de “Siglo XX” en 1947, con 250 mineros muertos, y de Catavi en 1949, con unos 500 mineros muertos). Los líderes del MNR, perseguidos, están en la cárcel, la clandestinidad o el exilio.

En estas condiciones, se llega a las nuevas elecciones de mayo de 1951. Seis candidatos comparecen, aunque uno de ellos —Paz Estenssoro, del MNR— se encuentra en el exilio. Sin embargo, a medida que el recuento de los votos avanza, Paz Estenssoro —acompañado en la candidatura para la Presidencia por Hernán Siles Zuazo para la Vicepresidencia— va destacándose como triunfador. No obstante, el sistema político boliviano impone, según la Constitución, que, si ninguno de los candidatos obtiene mayoría absoluta, debe ser el Congreso quien decida la figura presidencial. Parece que la costumbre fuerza a elegir al más votado.

En estas condiciones, el Presidente Mamerto Urriolagoitia —que había ascendido de la Vicepresidencia a la suprema magistratura por enfermedad de Hertzog en octubre de 1948— promueve un golpe de Estado (el 16 de mayo) contra sí mismo, organizado por una Junta Militar que encabeza Hugo Ballivian, a fin de no entregar el poder a Paz Estenssoro. Es lo que desde entonces se ha llamado “mamertazo”. La razón para este autogolpe es ahora la de que un gobierno del MNR significaría la instauración del comunismo en Bolivia. (Entre el movimiento contra Villarroel-MNR de 1946 y este “mamertazo” contra las posibilidades del MNR se ha producido la aparición de la “guerra fría”, a raíz de 1947 con la consiguiente salida de los ministros comunistas del gobierno boliviano).

El gobierno de la Junta Militar presidida por el general Hugo Ballivian, que reincide en la política de Hertzog-Urriolagoitia, no saca al país del marasmo económico. Incluso se llega a un convenio con la ONU que significa el establecimiento en Bolivia de algo muy similar a un fideicomiso.

El MNR y los sindicatos, en la clandestinidad, se expanden y se organizan, preparándose para una acción insurreccional. Se crean comandos preparados para movilizarse en minutos, Hernan Silez Zuazo, subjefe del MNR, organiza desde la clandestinidad la capacidad de actuación de estos grupos.

En el propio seno de la Junta Militar el desencanto crea importantes fisuras. El ministro de Gobierno, general Antonio Seleme, se decide a preparar un golpe de timón, tratando de poner de acuerdo a la fuerza de carabineros que él manda, a militares nacionalistas, a la Falange Socialista Boliviana —nacionalismo de derecha— y al MNR. La FSB denuncia estos intentos, y fuerzas militares toman posiciones en torno a La Paz.

EL NACIONALISMO REVOLUCIONARIO: EL MNR EN EL PODER

En la mañana del 9 de abril de 1952 estalla finalmente la revolución. Carabineros y milicias del MNR ocupan La Paz. A las tres de la tarde el Ejército inicia su ataque contra los sublevados. Se generaliza el combate más duro y encarnizado durante esta tarde y la siguiente noche. Las milicias hacen cola tras de cada fusil en acción. Siles Zuazo —único jefe, pues Seleme se ha refugiado en una Embajada— convoca una reunión en la Universidad. Lechín, líder minero, está presente. Se decide continuar la lucha. Se ocupan arsenales y llegan mineros de Milluni. El Ejército ve detenida su ofensiva. Muchos soldados desertan. Y muchos oficiales no se encuentran dispuestos a reprimir a los movimientistas y se entregan. La respuesta militar contra el nacionalismo carecía de moral. El 11, la situación ha cambiado totalmente a favor del MNR: la rebelión se ha impuesto. Hernán Siles recibe en Laja, cercana a La Paz, la rendición militar y asume el mando del país. Algunos le proponen quedarse en la presidencia. El rechaza la propuesta y espera el regreso de Paz Estenssoro, exiliado en Buenos Aires. Impone, no obstante, en los primeros días del triunfo, una política de no represión, de no venganza: los enemigos salen al extranjero.

Paz Estenssoro regresa el 13 de abril y es acogido como Presidente constitucional. El 16 toma posesión y declara que los fines de la revolución son dos: realizar la voluntad popular manifestada en las elecciones

de 1951, y desarrollar las transformaciones económicas, sociales y políticas anunciadas en el programa del MNR.

Los cuatro primeros años de gobierno del MNR significan un gobierno nacionalista revolucionario que actúa por decretos-leyes, sin Parlamento. El MNR monopoliza el poder, pero, sin embargo, no ejerce un poder totalitario porque prevé elecciones libres para el siguiente cuatrienio, y, sobre todo, porque de hecho establece un co-gobierno con los sindicatos. La COB (Central Obrera Boliviana), que se organiza entonces, paralelamente al MNR, no es una correa de transmisión del partido en el poder. Es un poder paralelo, cogobernante y presionante, con ministros obreros y campesinos en el gobierno. Su líder máximo es el dirigente minero Juan Lechín.

La acción de gobierno inmediata desarrollada por el MNR cumple en un plazo muy breve las promesas del programa partidario:

- El 13 de mayo decreta la creación de una Comisión para el estudio de la nacionalización minera.
- El 2 de junio decreta el control de exportaciones.
- El 2 de agosto Día del Indio, decreta el voto universal (anteriormente cerrado a los analfabetos, las mujeres, los militares y los eclesiásticos).
- El 31 de octubre decreta la nacionalización minera (la nacionalización afecta a las minas de las tres grandes compañías Patiño, Hochschild y Aramayo, creándose para su administración la COMIBOL —Corporación Minera de Bolivia—, se establece indemnización por instalaciones —no por la minas en sí— por un monto de 21.750.000 dólares, aunque, estimándose en una cantidad muy superior lo que las compañías adeudan al Estado, éste no se compromete a pagar nada. Se establece, por otra parte, la participación sindical en la gestión de las minas (un sistema de cogestión sin antecedentes en América).
- El 20 de enero de 1953 se decreta la creación de la Comisión de Reforma Agraria.
- El 2 de agosto de 1953 se firma el decreto de Reforma Agraria (Resulta la más profunda revolución agraria de las realizadas en América hasta el momento: se distribuyeron los latifundios entre los campesinos, fraccionándose la propiedad en parcelas familiares — aunque hubo discusión sobre la conveniencia o no de este sistema y de la alternativa del cooperativismo agrario, prevaleció el criterio de hacer lo que los propios campesinos demandaban en ese

momento—, dejando los campesinos de ser parte de la naturaleza para pasar a ser parte decisiva de la economía y de la política bolivianas).

Otras medidas revolucionarias significaron la reforma educativa, la diversificación económica y la comunicación con el Oriente —la carretera a Santa Cruz— integración física de Bolivia, se concluyó en 1954.

La nacionalización minera se produce en el peor momento internacional: con el fin de la Guerra de Corea, la cotización del estaño cae en los mercados internacionales. Por otra parte, Bolivia no tiene refinerías para este mineral y depende de las instaladas en Inglaterra y los Estados Unidos, conectadas con las compañías expropiadas. Las presiones sobre Bolivia son fuertes, y su gobierno ha de acabar pagando indemnización a aquellas. Por otra parte, se desata una gran demagogia sindical —alientada por el sector de Lechín— que disminuye la productividad. El coste del mineral sube mientras su precio baja. Otros sectores han de pagar esta contradicción. Se crean tensiones y aumenta la inflación escandalosamente.

La situación se hace muy difícil. Hay que tener en cuenta que la renta por habitante del boliviano estaba en ese momento a tanta distancia de la del cubano, como la de éste se encontraba de la del norteamericano. Bolivia no podía apretarse el cinturón: el hambre estaba en puertas. Los Estados Unidos ofrecieron ayuda, y Bolivia aceptó: se salvó del hambre, pero sometiéndose a nuevos condicionamientos norteamericanos. Una alternativa de ayuda soviética no aparecía por entonces en el horizonte. Y, desde luego, no se quiso optar por una “dictadura del proletariado”, instaurando una fórmula totalitaria, con disciplina férrea y sin libertades sindicales. El propio MNR se vio afectado por el enfrentamiento de corrientes más radicales y corrientes neoburguesas, que tendían al establecimiento de una burguesía nacional, antes inexistente.

En plena crisis se llega al siguiente período presidencial. Hernán Siles Zuazo ocupa esta vez la suprema magistratura. Es el resultado de las primeras elecciones con voto universal, que dan al MNR un amplio triunfo.

Hernán Siles gobierna constitucionalmente, con el Parlamento funcionando —si bien con mayoría del MNR—. Los decretos-leyes de la época anterior son refrendados por el nuevo Legislativo.

Siles se siente obligado a hacer frente a la marcha desbocada de la inflación, y, en una medida tremendamente criticada desde la izquierda,

establece un Plan de Estabilización Económica. El sector de Lechín — quien en principio acepta el Plan— se vuelve contra éste, y plantea una huelga de protesta. El Presidente, en la disyuntiva de imponerse por la fuerza a sus compañeros de revolución o abandonar el Plan estabilizador que estima necesario en conciencia, encuentra la salida original de declararse en huelga de hambre. Los trabajadores renuncian a su propia huelga y le reciben entre aclamaciones.

Paz Estenssoro, alejándose del modelo mexicano —en el que el principio de “no reelección” significó una estabilidad sin parangón—, decide volver a la presidencia, lo que causa hondo malestar en el partido. No obstante, consigue su propósito y sube nuevamente al poder, acompañado por Juan Lechín como Vicepresidente, para el mandato 1960-1964. Las tensiones internas movimientistas —entre Estenssoro y Lechín y obrero-campesinas— se intensifican. (Hay que tener en cuenta, por otra parte, que ha aparecido para entonces el hecho del “castrismo”).

El régimen de Paz Estenssoro se va haciendo más conservador en política y más duro en los medios —en la lucha contra la oposición—. Además, Paz Estenssoro se empecina en un error que va a acabar con el poder y los restos de unidad del MNR: quiere prolongar su presidencia por otro mandato, personalizando la revolución en él. Hace cambiar la Constitución para que la reelección consecutiva sea posible y se presenta a las nuevas elecciones acompañado del general de aviación René Barrientos para la Vicepresidencia. Obtiene el triunfo, pero el MNR queda deshecho: Lechín ha formado su PRI, grupo político aparte, y Siles rompe con Estenssoro.

La nueva Presidencia de Paz Estenssoro dura muy poco. Toma posesión el 6 de agosto de 1964 y el 3 de noviembre siguiente se le subleva su propio Vicepresidente, general René Barrientos. Nadie le defiende. El régimen del MNR concluye.

EL RÉGIMEN DE BARRIENTOS

El general Barrientos, temperamental, singular, amigo de los campesinos —con los que establece un pacto— y enfrentado con los mineros, practica una política en cierta medida desnacionalizadora y de regresión social.

En 1966, queriendo convertirse en Presidente de derecho, comparece en unas elecciones —que gana— acompañado para la Vicepresidencia por el socialdemócrata Luis Adolfo Siles. Gobierna con un autoritarismo que Luis Adolfo Siles trata de paliar. Apoyado por los Estados Unidos y la empresa privada, desarrolla una política de especial dureza con los mineros. (Bajo su gobierno se produce la aventura guerrillera de Ernesto Guevara, que acabará con la muerte de éste el 9 de octubre de 1976.

El 27 de abril de 1969 el propio Barrientos fallece en un accidente de helicóptero.

Le sucede, como era obligado constitucionalmente, Luis Adolfo Siles, con tendencia a la restauración plena de la vida democrática. Sin embargo, su gobierno será muy breve, pues el comandante en jefe del Ejército, general Alfredo Ovando, le desplazará de la Presidencia el 26 de septiembre del mismo año 1969.

DE OVANDO A TORRES

Ovando, que había sido el restaurador de la organización militar bajo la Presidencia de Hernán Siles, significa un cierto giro hacia la izquierda, desde el punto de vista social y nacionalista: renacionaliza el petróleo, establece relaciones con Rusia y deroga la legislación represiva laboral de Barrientos.

Esta posición, de restauración, en cierta medida, de las líneas de la revolución del 52, provoca una reacción del sector militar de la derecha. Un alzamiento de este sector se produce el 4 de octubre de 1970, encabezado por el nuevo comandante en jefe del Ejército, general Rogelio Miranda. Ovando dimite, asumiendo el poder una Junta Militar.

Sin embargo, el triunfo de la Junta de tendencia derechista es muy precario. Otro general, en posición política contraria, hacia la izquierda nacionalista, Juan José Torres, se rebela contra esta situación y se apodera del poder con apoyo de una huelga general declarada por la COB (7 de octubre).

Torres establece un gobierno, que va a ser también muy breve, de clara orientación nacionalista y social. Su propósito es formar un gabinete con ocho militares y ocho dirigentes sindicales. Sin embargo, la posición de la COB es muy reticente. Se desconfía de Torres, por la razón de que entre los dirigentes obreros se han introducido dirigentes universitarios ultra-

izquierdistas. El infantilismo revolucionario convierte a la Asamblea Popular que se ha formado —y que aparece como un contra-poder frente al gobierno de Torres— en un campeonato de radicalismos verbales.

A pesar de las medidas del gobierno de Torres: confirmación de la nacionalización petrolífera, puesta en libertad de Regis Debray y Ciro Bustos, renacionalización de la mina Matilde, de cinc, inauguración de la fundición de estaño en Vinto (Oruro) —obra del gobierno anterior—, etc.; la Asamblea del Pueblo no le da cuartel. El país se encuentra en una situación caótica. Hay quienes hablan de próximos movimientos secesionistas en Santa Cruz.

EL GOBIERNO DE HUGO BÁNZER

Los militares de orientación conservadora realizan un nuevo golpe militar con apoyo de sectores civiles, y bajo la dirección del general Hugo Bánzer, el 21 de agosto de 1971.

Bánzer ocupa la presidencia con el apoyo civil de un Frente Popular Nacionalista, que integra a la FSB y a un sector del MNR encabezado por Paz Estenssoro. (Otro sector del MNR, encabezado por Hernán Siles Zuazo, se niega a esta colaboración, y forma el MNR de Izquierda).

El nuevo régimen se inclina abiertamente hacia la derecha, sufriendo sus consecuencias los sectores obreros y mineros. También se desliza pronto a la dictadura personal, desembarazándose de los apoyos civiles. Las Fuerzas Armadas asumen todo el poder, disolviéndose toda actividad política y sindical en noviembre de 1974. Con una gran habilidad, con moderación en medio de su firmeza, lejos de cualquier apasionamiento, consigue durar en la Presidencia boliviana, suerte muy poco frecuente.

El régimen de Bánzer tiene, por lo demás, una gran suerte en materia económica: los precios del estaño suben. Esto produce una aceleración del desarrollo económico, especialmente de los mineros medianos —no afectados por la nacionalización de 1952—, que se convierten en la nueva burguesía local, juntamente con enriquecidos comerciantes. Es una clase social nueva, antes inexistente, que va a cobrar conciencia de su fuerza, y que concentra en sí misma el crecimiento económico. Mientras, las clases populares —desprovistas de derechos políticos y sindicales— se mantienen en la pobreza.

Bánzer, por otra parte, practica una política liberal hacia el capital extranjero: desnacionaliza nuevamente el petróleo y llama a las inversiones exteriores.

Los sectores populares, que no perciben los beneficios del enriquecimiento general, resisten primero y tratan de reemprender su lucha después. En el plano sindical actúa la COB clandestina. En el plano político un pacto entre el MNR de Izquierda y el nuevo Movimiento de Izquierda Revolucionaria —firmado en Caracas en 1977—, reinicia la ofensiva bajo el signo de la “izquierda nacional”. Por su parte actúan en defensa de los “derechos humanos” diversas asociaciones y muy especialmente la Iglesia Católica.

El 9 de noviembre de 1977, Bánzer anuncia una apertura política y próximas elecciones. Pero todo ello en forma limitada. Especialmente en materia de regreso de exilados, establece una lista de los que no podrán volver. Ello provoca un movimiento en pro del regreso de aquellos sin ninguna restricción, de la realización de elecciones sin limitaciones políticas ni sindicales. Una huelga de hambre, inicialmente de un grupo de mujeres, se va extendiendo en Bolivia. Luis Adolfo Siles, la Comisión de Derechos Humanos, la Iglesia y sus organizaciones, en general, secundan el movimiento. Llega a haber 1.500 huelguistas de hambre, ejerciendo su presión “no violenta”. El 18 de enero de 1978, Bánzer cede, y anuncia que habrá elecciones tras una amnistía política total.

ELECCIONES DE 1978, 1979 Y 1980

A partir de este momento se van a producir tres elecciones presidenciales y generales consecutivas (1978, 1979 y 1980) que no consiguen llevar a Bolivia a una normalidad constitucional.

La primera de estas elecciones, todavía bajo la presidencia de Bánzer, se efectúa el 9 de julio de 1978. Los principales candidatos son: el general Pereda Asbun —derecha continuista—, Paz Estenssoro —centro-derecha—, y Siles Zuazo —centro-izquierda—. Los recuentos van dando el triunfo a Siles; pero el 19 de julio la Corte Nacional Electoral anula las elecciones. Seguidamente, el 21 de julio, Pereda Asbun proclama que es el triunfador, derroca a Bánzer y se instala en la presidencia.

La protesta se generaliza. Y el 14 de noviembre Pereda Asbun ha de anunciar que habrá nuevas elecciones en mayo de 1980.

Ello no satisface a la oposición. Ni al sector militar constitucionalista — o institucionalista—. Y un general de esta línea, David Padilla Arancibia, comandante en jefe del Ejército, impone un giro democratizador haciéndose con el poder el 24 de noviembre. Padilla anuncia elecciones libres para el 1 de julio de 1979.

Efectivamente, en esta fecha se celebran las segundas elecciones presidenciales y generales. Los resultados muestran que Siles marcha en cabeza en número de votos. Sin embargo, en el Parlamento —que ha de decidir al no haber obtenido ningún candidato la mayoría absoluta— hay un empate entre Siles y Paz Estenssoro. Así se llega a una solución provisional: se elige un Presidente por un año —Walter Guevara Arze—, quien convocará nuevas elecciones en 1980.

Guevara Arze trata de aplicar una política de conciliación —tras su toma de posesión el 8 de agosto. Se le oponen enormes dificultades económicas, pues en Bolivia repercuten ya los efectos de la recesión mundial. Pretende solucionarlas solicitando una prórroga de un año en su mandato.

Sin embargo, el gobierno de Guevara Arze no va a durar ni siquiera el año previsto: el 1 de noviembre, un nuevo golpe militar, de muy extraña gestación —cuenta con apoyos en distintos partidos y, especialmente, del paz-estenssorismo—, trata de hacerse con el poder. El nuevo golpe tiene a su frente al coronel Alberto Natusch Busch.

Una resistencia tenaz del pueblo —que produce unos 400 muertos—, hace desistir a Natusch de su empeño, renunciando después de 16 días de “gobierno”. Pero no con la vuelta de Guevara Arze, sino con la designación por el Parlamento de un nuevo Presidente para completar el mandato previsto de aquel: la doctora Lydia Gueiler.

Bajo esta nueva presidencia se desarrollan (el 29 de junio de 1980) las terceras elecciones. Se presenta un elevado número de candidatos a la presidencia, pero los principales son: Hugo Bánzer —de Acción Nacionalista Democrática, derecha continuista—, Paz Estenssoro —de la Alianza del MNR, centro-derecha—, y Siles Zuazo —de la Unión Democrática y Popular (UDP), integrada por el MNR de Izquierda, el MIR, el PCB, etc., centro-izquierda.

Obtiene nuevamente mayoría la candidatura de Hernán Siles Zuazo —acompañado para la vicepresidencia por Jaime Paz Zamora, líder del MIR. Sin embargo, no obteniendo mayoría absoluta, ha de ser el Parlamento

quien decida. Parece, no obstante, que Siles cuenta con votos suficientes para hacerse con la designación.

Pero tampoco esta tercera vez Bolivia va a encontrar su normalización constitucional, ni Siles su presidencia.

EL RÉGIMEN DE GARCÍA MEZA. EL NARCOTRÁFICO

El 17 de julio de 1980, antes de que los parlamentarios pudieran designar nuevo Presidente, el comandante en jefe del Ejército, general Luis García Meza, en un golpe de Estado fulminante, iniciado en Trinidad e inmediatamente secundado en La Paz, se apodera del poder, destruyendo las posibilidades de reacción popular. El golpe cuenta con una perfecta preparación, y con elementos paramilitares argentinos, que en una actuación rapidísima y valiéndose de ambulancias, ocupan los lugares en donde se podía producir una reacción, especialmente el local del COLADE —organización establecida para responder, precisamente, a un eventual golpe militar de la derecha—. En esta acción es muerto uno de los líderes más destacados de la izquierda, Marcelo Quiroga Santa Cruz (del Partido Socialista 1). La COB también es tomada —y después destruida incluso físicamente—. Hay lucha en las minas durante unas jornadas con un elevado número de víctimas. Las organizaciones políticas y sindicales son desarticuladas, y sus líderes detenidos, encarcelados, si no escapan al exilio o se asilan en Embajadas.

La motivación oficial del golpe es “la necesidad de evitar la imposición de un régimen comunista que se instalaría en el país con la UDP de Hernán Siles”. Se alega, igualmente, que los resultados electorales han sido amañados a favor de este candidato. Y la política que se va a imponer sigue enteramente las líneas del resto de los regímenes militares del Cono Sur, a cuyo amparo pretende colocarse.

Parecería que por parte de los Estados Unidos, sobre todo después de las elecciones que dieron el triunfo a Reagan, habría una aproximación al nuevo régimen, como efectivamente se produce con relación a Argentina y Chile. Sin embargo no es así: ni Carter ni Reagan establecen relaciones normales diplomáticas con el régimen de García Meza. Entre ambos países se interpone un factor nuevo, que no tiene carácter político: la presencia del narcotráfico.

Este nuevo factor se ha ido convirtiendo en los últimos años en algo más que un marginal comercio clandestino: Bolivia llega a producir el 30 % de toda la cocaína del mundo. Su exportación significa 1.200 millones de dólares para Bolivia en 1980. Se ha convertido de esta manera en el primer producto de exportación. Por supuesto, ilegal. Un río de dólares se vierte en ciertas zonas productoras, sobre pequeños propietarios, primeros manipuladores y, finalmente, grandes agentes exportadores.

Lo grave de la situación es que la Administración norteamericana considera que el gobierno de García Meza está implicado en este tráfico, especialmente sus ministros Luis Arze Gómez —ministro del Interior y directamente encargado de la persecución del tráfico ilegal, y, por otra parte, organizador de los grupos paramilitares—, y Ariel Coca —ministro de Educación—, ambos coroneles. Informes de la U.S. Drug Enforcement Agency (DEA) —agencia norteamericana para la lucha contra el narcotráfico— acusaban a ambos ministros, y señalaban a Roberto Suárez —primo del coronel Arze— como el principal proveedor de coca para la exportación. También señalaban como complicados al general Waldo Bernal —miembro de la nueva Junta Militar, por la Aviación— y al coronel Faustino Rico Toro —jefe de la inteligencia del Ejército.

La presión norteamericana lleva a García Meza —cuyo principal problema es, precisamente, la normalización de relaciones con los Estados Unidos— a cesar en sus carteras ministeriales a los coroneles Arze y Coca, pero sin retirarles su apoyo (en febrero de 1981). A Arze Gómez le nombra director del Colegio Militar del Ejército “Gualberto Villarroel”.

Esta aparente solución no satisface a la administración de los Estados Unidos. La CBS norteamericana, por su parte, efectúa el 1 de marzo una emisión de 60 minutos —con enorme audiencia— sobre el narcotráfico y Bolivia, actuando de acusador contra las autoridades bolivianas mencionadas el senador Denis De Concini.

La emisión tiene un enorme impacto en Estados Unidos. Y, por supuesto, en Bolivia. Su contenido llega a deslizarse en el Colegio Militar. Los cadetes se sublevan contra su director, el coronel Arze, el 17 de marzo. Días después, Arze es relevado de su mando.

En el Ejército se produce y crece un movimiento de alarma, que clama por la recuperación del honor de la Institución manchado por algunos oficiales corrompidos. Un ejemplo es el documento elaborado por la Comisión de Política Internacional del CONAL en marzo de 1981, y firmado por

dos generales y un contralmirante. En él se pide una acción enérgica contra la causa del descrédito internacional de Bolivia. Y se dice: *“Estados Unidos ha planteado claramente que deben ser sancionados quienes dirigen el narcotráfico y ocupan situaciones dentro de la institución armada”*.

Una serie de levantamientos militares con este sentido se producen en los meses siguientes, aunque García Meza siempre consigue mantenerse en el poder, manteniendo así en la impunidad a los narcotraficantes. En mayo se subleva el Centro de Instrucción de las Tropas Especiales, de Cochabamba. Su comandante, el teniente coronel Emilio Lanza, es doblegado y ha de emprender el camino del exilio. Con él, otros numerosos jefes militares han de salir del país. Lanza declara que su actitud buscaba exclusivamente “salvar la dignidad y el honor de la institución tutelar” ante la acción “de aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que, mancillando el sagrado uniforme de la Patria y rompiendo con el juramento que hicieron a tiempo de regresar del Colegio Militar, se comprometieron con la mafia narcotraficante” Más adelante, en su carta dirigida a sus compañeros de armas en el mes de junio, afirma: “Bajo la máscara de “unidad monolítica” de las Fuerzas Armadas se pretende acallar a los militares que tienen conciencia, creando la insensibilidad frente a la miseria y la desesperación del resto de los bolivianos, abriendo así un profundo abismo entre pueblo y Fuerzas Armadas, lo que tarde o temprano provocará una reacción de quienes, desesperados por el hambre prefieran acabar sus días frente a la metralla paramilitar”. Lanza da cuenta, además, de que el detonante de su actitud fue el conocimiento de un tráfico de piedras preciosas de la Caiba en el que participaron miembros de la Junta.

La protesta en el seno de los sectores militares crece. El camino del exilio es emprendido, incluso, por los ex Presidentes militares Bánzer y Natusch.

Luis García Meza, ante esta situación, promete públicamente abandonar el poder el 17 de julio, aniversario del golpe de Estado que le dio el poder. Pero, inmediatamente, inicia una campaña de respaldo a su gestión y a su persona, para permanecer en la presidencia. Emisiones de radio y de televisión, peticiones de entidades más o menos oficiosas, manifestaciones, etc., son organizadas con este propósito. Ante una de estas manifestaciones, García Meza afirma desde el balcón del palacio de gobierno: “Como ustedes me lo pidan, me quedaré nomás”.

La insinceridad de García Meza lleva a nuevas sublevaciones militares. El 27 de junio se levantan contra él los generales Numberto Cayoja —en

ese momento comandante general del Ejército— y Lucio Áñez —en ese momento jefe del Estado Mayor—. Su propósito está a punto de lograr éxito; pero acaba fracasando. Son derrotados y se exilian en Argentina, con cuatro generales más.

Parece que García Meza se ha liberado de todos sus opositores, mientras un centenar de jefes militares se encuentran en el exilio. De esta forma, el 17 de julio, frente a sus promesas de abandono, ocurre todo lo contrario: es confirmado en su puesto por los tres jefes de las Fuerzas Armadas —Ejército, Fuerza Naval y Fuerza Aérea—, aunque estos hacen notar que es “la Junta de Comandantes y no el Jefe del Estado quien constituye el órgano supremo de dirección del país”, y que, por ello, “podrán relevar al Presidente si razones de Estado así lo aconsejan”.

EL GOLPE NÚMERO 195: NATUSCH Y ÁÑEZ

El 3 de agosto se produce un nuevo golpe militar, con ramificaciones civiles. Es el número 195 de la historia de la Bolivia independiente. Los generales Alberto Natusch Busch y Lucio Áñez Rivera —regresados al país clandestinamente desde el exilio—, en unión de personalidades políticas como Luis Adolfo Siles, se alzan contra García Meza en Santa Cruz, con el apoyo de seis guarniciones militares del país. Reclaman la salida de García Meza y el restablecimiento de la democracia en Bolivia.

La radio oficial de La Paz acusa a los sublevados de “instrumentos de la extrema izquierda internacional y de los intereses extranjeros que pretenden “socializar” y “comunizar” Bolivia”.

La sublevación recibe el inmediato apoyo de las organizaciones clandestinas y exiladas. La COB ordena una huelga general de solidaridad. Una “Cadena de la Dignidad Nacional” realiza emisiones de apoyo desde numerosas radios. Desde Lima Hernán Siles, y Lydia Gueiler desde Chile se identifican con los propósitos democratizadores de la sublevación. Numerosas guarniciones se van sumando a la misma.

El 4 de agosto, finalmente, García Meza dimite. Asume directamente el gobierno la Junta de Comandantes, presidida por el General Bernal. Pero al día siguiente, 5 de agosto, los sublevados exigen cambio, no de personas, sino de sistema.

El 6 de agosto, Día Nacional boliviano, un representante del UDP en el exilio —Carlos Quiroga, senador electo del MIR— analiza en conferencia

de prensa celebrada en Bruselas las tres posibilidades que se abren ante su país. En primer lugar, el continuismo puro y simple del régimen del 17 de julio de 1980, aunque bajo la figura del general Bernal —figura acusada de conexiones con el narcotráfico—, que proseguiría la represión y la corrupción. Es una posibilidad rechazada, naturalmente. En segundo lugar, una vía intermedia, consistente en el restablecimiento del modelo “banzerista”, con o sin Bánzer, con cierta tolerancia y apertura, pero sin cambios reales. Es una salida también rechazada. Y, en tercer lugar, un gobierno civico-militar de transición, integrado por fuerzas civiles y militares institucionalistas. Esta solución sí sería aceptada.

Coincide este planteamiento con los tres sectores existentes en ese momento en las Fuerzas Armadas bolivianas: un sector vinculado al narcotráfico —en el que se ubica a Bernal—, otro sector intermedio, pro-norteamericano, con la cara más limpia, pero sin dar paso a una verdadera democratización —en que destaca el ex Presidente Bánzer—, y, finalmente, el sector institucionalista y nacionalista —cuya figura más destacada es Áñez.

En los días que siguen, durante todo el mes de agosto, las reuniones, discusiones y conciliabulos van a dar como resultado el triunfo de la segunda opción, con ciertos matices que pueden acercarla a la tercera. (En todas estas conversaciones actúa con talante mediador la Iglesia Católica, especialmente el cardenal Maurer, que siempre mostró su oposición a las formas políticas y policiales del régimen de García Meza).

Un primer paso en los contactos se realiza el 7 de agosto. Natusch se reúne cerca de La Paz con la Junta de Comandantes, reconoce la autoridad de esta, y declara que se retira “a la actividad privada” para evitar una guerra civil, tras llegar a un acuerdo sobre el futuro del país. El acuerdo a que se ha llegado implica la reunión de comandantes para elegir un nuevo Presidente, y la reposición en sus puestos de todos los militares exilados.

Bernal, sin embargo, sigue apareciendo como presidente de la junta con tendencia a perpetuarse en el puesto. Áñez, en nombre del “Comando Revolucionario” considera que Natusch se ha extralimitado en sus facultades, y que la Junta está incumpliendo sus compromisos, tratando de continuar en sus funciones. También, el 21 de agosto, afirma — ante las dilaciones de la Junta— que García Meza sigue manejando entre bastidores a la misma.

El 26 de agosto, un decreto de la Junta de Comandantes da un verdadero paso hacia el efectivo cumplimiento de su compromiso: establece que dicha Junta significa un “régimen de transición histórica institucional” y deroga el “Estatuto de Gobierno de las Fuerzas Armadas”. Parece que la designación de nuevo Presidente, con el compromiso de emprender el retorno a la vida democrática, es inminente.

TORRELIO, NUEVO PRESIDENTE. PLAN DE RESTAURACIÓN DEMOCRÁTICA

Bánzer, al que todos consideran un candidato muy bien visto por los Estados Unidos, se declara dispuesto a retomar la Presidencia, “si las Fuerzas Armadas se lo ordenan”, según afirma públicamente.

Por su parte, el también general y ex Presidente David Padilla —de la línea institucionalista— también se muestra dispuesto a volver a ocupar el cargo, pero indicando que “si existe consenso militar y civil al respecto”.

Por su parte, numerosos militares institucionalistas defienden como la candidatura más adecuada la del general Lucio Áñez Rivera, verdadera cabeza del golpe que obligó definitivamente a dimitir a García Meza.

Ninguno de ellos va a resultar finalmente designado. Después de amplias conversaciones, el 4 de septiembre, a la una y 38 de la madrugada, se anuncia que la Junta de Comandantes ha designado como Presidente de la República al general, miembro de la misma, Celso Torrelio Villa, cuenta en este momento con 48 años de edad (nació en Chuquisaca el 3 de junio de 1933). Alcanzó el grado de subteniente en diciembre de 1955. En diciembre de 1976, alcanzó el de coronel. El de general de brigada en diciembre de 1980. Y el de general de división el 23 de julio de 1981.

El plan político de Torrelio es de una progresiva y lenta apertura hacia una normalización democrática en un plazo de tres años. Va aflojando los controles y la falta de libertades políticas y sindicales con una extrema cautela, sin la menor prisa, pero en forma continua.

La oposición le ve como el más limpio de la Junta Militar, con cierta influencia de la Iglesia —tiene un hermano sacerdote—, y especialmente del cardenal Maurer —del que es amigo personal.

Los sectores institucionalistas de las Fuerzas Armadas, en especial los cercanos a Áñez, presionan para un proceso sin detenciones hacia el res-

tablecimiento de la libertad política, al mismo tiempo que para una eliminación del seno de aquellos elementos acusados de narcotráfico.

La oposición, por su parte, presiona para el acortamiento del plazo de tres años establecido por el general Torrelio para la democratización total.

BOLIVIA, POR LA VÍA DEMOCRÁTICA

El 21 de abril de 1982 se produjo un cambio importante en los planes gubernamentales: se anunciaron elecciones generales en 1983, con toma de posesión del nuevo Presidente el 6 de agosto del mismo año. El plazo anterior fijaba el traspaso a los civiles en 1984.

El 25 de mayo el gobierno decretó una amnistía política general, legalizando los partidos y sindicatos.

Posteriormente, el general Torrelio fue sustituido, en julio, por el general Guido Vildoso como nuevo presidente.

Las presiones políticas y de los trabajadores se multiplicaron, sobre un fondo de total hundimiento económico.

De esta forma, el Presidente Vildoso decidió, finalmente, la entrega del poder a los civiles, mediante el procedimiento de reunir a los parlamentarios elegidos en 1980 para que estos, a su vez, eligieran Presidente y Vicepresidente.

El 5 de octubre los parlamentarios designaron, por 113 votos de un total de 146 diputados y senadores, a Hernán Siles Zuazo como Presidente, igualmente eligieron a Jaime Paz Zamora para ocupar la Vicepresidencia.

Ambos tomaron posesión el 10 de octubre de este año 1982.

A partir de esta fecha, las sucesiones presidenciales se han producido tras procesos electorales democráticos.

Hernán Siles, que puso su firma en el hecho revolucionario de 1952, la puso también en la vía democrática de 1982, entregando el poder —con un año de anticipación— a su sucesor, democráticamente designado, en 1985.